

Imprimir

La narrativa que encumbró a Abelardo de la Espriella a la Presidencia de la República se edificó sobre una promesa de ruptura radical: el advenimiento de la “Patria Milagro”, un concepto publicitario destinado a convencer a los electores de que el nuevo Ejecutivo erradicaría para siempre los vicios históricos de la política criolla. Según el discurso oficial, el poder no se entregaría a las maquinarias clientelistas ni a los operadores de la politiquería tradicional, sino a un equipo de mentes probas, independientes y rigurosamente preparadas. Ya hemos visto en los dos artículos anteriores referidos a las mujeres en el gabinete[1] que la realidad ha sido totalmente contraria.

El contraste entre la retórica de campaña y la cruda realidad del nombramiento ministerial revela una profunda impostura. Al examinar con lupa las hojas de vida, los antecedentes judiciales, los compromisos políticos y las primeras ejecutorias de los funcionarios designados, se evidencia que el gabinete no es el refugio de la meritocracia, sino un mosaico de cuotas burocráticas, favores electorales y perfiles marcados por graves cuestionamientos éticos y penales.

Esta contradicción estructural se agrava al recordar que la conformación del equipo de gobierno estuvo salpicada por una notoria improvisación y por la flagrante escasez de perfiles idóneos. Bajo la superficie de los ministerios estratégicos operan los mismos intereses corporativos y clanes políticos que el mandatario juró combatir. Para dimensionar la magnitud de esta farsa institucional, es imperativo diseccionar, en esta primera parte, las trayectorias de cuatro de sus fichas, todas ellas con graves cuestionamientos: Omar Bula Escobar, Jaime Andrés Beltrán, Indalecio Dangond Baquero y Mauricio Gómez Amín.

1. Omar Bula Escobar: La geopolítica del resentimiento, los giros diplomáticos y el asalto ideológico a la Cancillería

En la cúspide del Ministerio de Relaciones Exteriores se encuentra Omar Bula Escobar, un nombramiento que encendió las alarmas de la diplomacia colombiana, no por acumular un prontuario de condenas judiciales, del cual carece formalmente en los estrados, sino por la naturaleza radical y confrontacional de su visión del mundo. Hijo de las élites políticas de

Córdoba y heredero de una dinastía de raigambre conservadora, Bula saltó al primer plano del Ejecutivo tras haber caminado durante más de dos décadas por los pasillos de las Naciones Unidas.

Lo que cabría esperarse de un diplomático con trayectoria multilateral, prudencia, talante negociador y apego estricto al derecho internacional, se convirtió, en su discurso, en un resentimiento activo contra el orden global. Las reiteradas declaraciones de Bula llamando a “desacralizar” la ONU no responden a un ejercicio técnico de modernización institucional, sino a un alineamiento dogmático con las corrientes más reaccionarias de la extrema derecha hemisférica. Al justificar su salida de la organización argumentando que esta se apartó de sus misiones neutrales para “tomar partido” ideológico, el canciller anticipó una política exterior de confrontación y no de respeto al derecho internacional.

Esta diplomacia del desprecio aísla a Colombia de los consensos globales en materia ambiental, de derechos humanos y de cooperación hemisférica, subordinando los intereses estratégicos de la Nación a los caprichos de la polarización ideológica y a la defensa acérrima de posturas doctrinarias anacrónicas. El palacio de San Carlos, en manos de Bula, dejó de ser el centro de la moderación exterior para transformarse en un altavoz de la confrontación ideológica permanente.

Por ese talante confrontativo y de fundamentalismo ideológico, en estos primeros días de gobierno se han producido decisiones tan violatorias del derecho internacional, como nunca vivió el país. Por un lado, el Ejecutivo dio un viraje histórico al reconocer formalmente la soberanía de Israel sobre los Altos del Golán territorio sirio arbitrariamente ocupado, rompiendo con los consensos multilaterales y desatando el repudio de la Liga Árabe. Solo Estados Unidos en su alianza imperial con Israel se había atrevido a tal exabrupto. Hoy en un acto repudiable de sumisión, el gobierno arrodilla a Colombia frente al imperio con semejante reconocimiento. Por otro lado, la Cancillería congeló de manera fulminante las relaciones con la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) y avaló las pretensiones de Marruecos sobre el Sáhara Occidental. Con estas medidas, la diplomacia colombiana subordinó su tradición jurídica a alineamientos unilaterales de marcada carga ideológica.

2. Jaime Andrés Beltrán: el saqueo institucional de los recursos públicos

Si la Cancillería se diseñó para la trinchera ideológica, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio fue entregado como un botín de la demagogia local. Jaime Andrés Beltrán Martínez, quien además de exalcalde de Bucaramanga funge como pastor cristiano vinculado al *Ministerio Evangelístico Camino a la Libertad*, utilizando su investidura de fe como plataforma discursiva y política, asumió la cartera arrastrando un prontuario de cuestionamientos que retratan con absoluta fidelidad los peores vicios de la política subnacional.

El paso de Beltrán por la administración municipal no solo estuvo marcado por fallos judiciales adversos que anularon su elección por doble militancia, sino por un profundo escándalo fiscal y penal que hoy investigan la Contraloría y la Fiscalía General de la Nación. El proceso gira en torno a la misteriosa y masiva desaparición de toneladas de materiales entre postes, transformadores, redes y miles de luminarias, retirados durante los procesos de modernización del alumbrado público de la capital santandereana. El desfaldo, avaluado por los entes de control entre 23.400 y más de 46.000 millones de pesos, apunta directamente a una red donde el material público terminó fundido en beneficio de particulares vinculados a su círculo familiar cercano, concretamente a su cuñado, Óscar Ramírez Luquerna. Adicionalmente, los funcionarios de la Contraloría que iniciaron investigaciones en su contra, misteriosamente fueron removidos de sus cargos, la camioneta del líder del equipo auditor fue abaleada[2] y en la Fiscalía la investigación no tiene avance en dos años.[3] ¿Responsabilidad del investigado o simple casualidad?

Lejos de rendir cuentas claras ante la justicia, el premio a su cuestionada gestión fue el salto al gabinete nacional. La catadura ética de Beltrán quedó refrendada en su primera semana al frente del ministerio: mientras las regiones sufrían los estragos de una grave emergencia sísmica nacional, el ministro fue descubierto disfrutando de unas placenteras vacaciones familiares en un hotel de playa en Santa Marta. Su cínica respuesta pública ante la indignación nacional, sentenciando que su deber es construir casas sin destruir hogares, constituyó una afrenta directa a la empatía, compromiso y decencia que exige el servicio

público.

3. Indalecio Dangond Baquero: la captura agraria, el favor a la élite y el talante antisindical en el campo

En el sector agropecuario, la pomposa promesa de llevar a cabo una transformación rural profunda colapsó de inmediato con la designación de Indalecio Dangond Baquero en el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Lejos de representar los intereses del campesinado minifundista o de los millones de trabajadores rurales sin acceso a la tierra, la llegada de Dangond simboliza la rendición formal del Ejecutivo ante las exigencias de los gremios agroindustriales más reaccionarios y el latifundismo tradicional.

Vinculado históricamente a las esferas del financiamiento agropecuario, la trayectoria de Dangond ha estado salpicada por cuestionadas operaciones de estructuración crediticia. Investigaciones periodísticas han expuesto cómo, desde su firma asesora *Open Loans*, dio el visto bueno a maniobras financieras irregulares para beneficiar a figuras como Juan José Lafaurie Cabal, hijo de la entonces senadora María Fernanda Cabal y del dirigente gremial José Félix Lafaurie, permitiéndole acceder de manera irregular a créditos preferenciales de Finagro y a cuantiosos subsidios estatales disfrazando a un joven de élite terrateniente bajo la categoría de “pequeño productor”. A esto se suman los antecedentes de su núcleo familiar, emparentado con beneficiarios de los multimillonarios y cuestionados subsidios no reembolsables del programa *Agro Ingreso Seguro*[4] durante el uribismo.

El talante autoritario de su administración quedó al desnudo a los pocos días de haberse posesionado, cuando encendió las alarmas ante la Procuraduría General de la Nación en un abierto intento por bloquear la conformación de un sindicato de trabajadores dentro del ministerio. Esta ofensiva antisindical confirmó que, para la cúpula de esta cartera, los derechos laborales consagrados en la Constitución son un estorbo intolerable y que la concertación social es reemplazada por la persecución a la organización gremial de los empleados públicos.

Como si lo anterior no fuera suficiente, el flamante ministro, tan pronto se posesionó,

ordenó borrar toda la información publicada sobre la gestión del Ministerio durante el gobierno de Gustavo Petro[5], pretendiendo, quizás, borrar de la memoria colectiva la importante entrega de tierras a los campesinos que se ejecutó en el gobierno anterior. La violación del ministro a la ley 1712 de 2014, sobre transparencia y acceso a la información pública es flagrante. Tal parece que el respeto a la ley no es propio de su comportamiento.

4. Mauricio Gómez Amín: El operador de los clanes costeños en el corazón del comercio exterior

El cuadro de la degradación ministerial se corona con la designación de Mauricio Gómez Amín en el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Abogado barranquillero y ficha indiscutible de las maquinarias electorales de la Costa Caribe, la hoja de vida de Gómez Amín es el mapa perfecto de la carrera politiquera tradicional: edil, concejal, representante a la Cámara y senador de la República bajo el amparo de los clanes liberales tradicionales, hasta que su conveniencia política lo condujo a saltar de orilla para liderar la estrategia electoral de la campaña presidencial de Abelardo de la Espriella.

Su supervivencia y ascenso político no se explican sin el concurso de las maquinarias y los cacicazgos que han dominado históricamente el departamento del Atlántico. Su trayectoria ha orbitado y tejido alianzas de cohabitación burocrática y electoral con estructuras de poder tan pesadas como la Casa Char y los engranajes del liberalismo costeño más tradicional, redes que históricamente han sido objeto de escrutinio por parte de veedurías e informes sobre la infiltración de intereses oscuros, redes de contratación regional y dinámicas de la parapolítica en la Costa Caribe.

Su nombramiento carece por completo de cualquier sustento técnico en materia de negociaciones comerciales internacionales, diplomacia arancelaria o fomento industrial. Entregar el timón del comercio exterior a un congresista reciclado por el clientelismo regional constituye una vulgar transacción burocrática destinada a pagar favores políticos a las casas políticas del Caribe y a garantizar el control de la contratación estatal en las regiones. En un ministerio que exige un altísimo nivel técnico para navegar las complejas tensiones de la

economía global, poner a un operador de la politiquería costeña demuestra que el reparto del botín presupuestal se antepuso al interés nacional.

Al ensamblar estas piezas del rompecabezas ministerial, el canciller radicalizado que rompe con la doctrina del derecho internacional, el ministro de Vivienda y pastor procesado fiscalmente por saquear alumbrados y evadido en plena crisis, el jerarca agropecuario que regala subsidios a la élite terrateniente y persigue sindicatos, y el congresista apadrinado por los clanes costeños reciclado en la cartera de comercio, la promesa del gobierno “impoluto y tecnocrático” de Abelardo de la Espriella, por la que mucha gente votó, se desploma por completo,

La “patria milagro” está evidenciando ser exactamente lo que prometía erradicar: un mecanismo de cooptación institucional donde el prontuario, el servilismo político y la defensa de los privilegios particulares sustituyen al mérito, la transparencia y la probidad. La ciudadanía asiste, de este modo, a la constatación de que el cambio institucional ofrecido en campaña, no era más que una fachada retórica para encubrir la restauración de las peores prácticas del clientelismo nacional, en una lógica autoritaria.

Ya empezamos a observar que lo peor, que ya está comenzando, escalará hasta límites insospechados.

[1] Ver Revista Sur, de 3 de agosto y de 10 de agosto de 2026

[2]

<https://www.facebook.com/JulioSanchezCristoOficial/videos/dur%C3%ADsimo-intercambio-entre-jaime-beltr%C3%A1n-ministro-del-gobierno-de-la-espriella-y/1578995170470463/>

[3]

<https://www.facebook.com/revistaRAYA/videos/%EF%B8%8F-de-17-julio-la-mano-de-ministro-de-vivienda-jaime-andr%C3%A9s-beltr%C3%A1n-para-frenar-l/1386684570260095/>

[4] El escándalo de Agro Ingreso Seguro (AIS) durante el gobierno de Álvaro Uribe consistió en la entrega irregular de millonarios subsidios estatales. El programa debía ayudar a campesinos pobres frente al Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos. Los subsidios terminaron en manos de grandes hacendados, familias adineradas y reinas de belleza, quienes fraccionaron sus tierras para recibir más dinero

[5] <https://x.com/MCarvajalinoV/status/2089480279220002905?s=20>

María Consuelo del Río Mantilla, Vicepresidenta Corporación Sur, Presidenta Liga
Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad – Limpal
Foto tomada de: El Espectador